



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 69/2004.

ACTOR:
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIOS: ROBERTO MARTÍN CORDERO CARRERA.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al dieciocho de marzo de dos mil cinco.

Vo.Bo.:

VISTOS: Y,
RESULTANDO:

COTEJÓ:

PRIMERO.- Por oficio presentado el veintinueve de junio de dos mil cuatro, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eugenio Elorduy Walther, quien se ostentó como Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California y Poder Ejecutivo, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se mencionan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:

"AUTORIDADES DEMANDADAS:- 1.- Congreso del Estado Libre y Soberano de Baja California.--- 2.-

Encargado del Despacho por Ministerio de Ley de la Contaduría Mayor de Hacienda y/o C. Auditor Superior de Fiscalización, ambos del Estado Libre y Soberano de Baja California.--- Ambas con domicilio conocido.--- ACTOS CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA: 1.- Del Congreso del Estado Libre y Soberano de Baja California los siguientes:--- a) El Acuerdo Económico aprobado tanto en lo general como en lo particular el doce de junio de 2004, y que en sus puntos resolutivos establece:--- Primero.- Que en los términos del artículo 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por tratarse de un asunto de urgente y obvia resolución dada la ilegal e ilícita actuación del Contador Jorge Alberto Coral Gutiérrez y que ha faltado a la probidad para con el Congreso del Estado, poniendo en riesgo el buen despacho de los asuntos de la Contaduría Mayor de Hacienda se aprueba la dispensa del trámite a Comisiones del presente Punto de Acuerdo Económico para que el mismo sea discutido y resuelto en esta sesión de Congreso.--- Segundo.- Este Congreso en los términos del artículo 67 bis, fracción VII y 79 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo aprueba la remoción del Contador Mayor de Hacienda C.P. Jorge Alberto Coral Gutiérrez y como consecuencia deja sin efecto todas y cada una de las funciones que desempeña en virtud de la pérdida de confianza en razón de los actos realizados en forma directa

289



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN



material y por haber incurrido en falta de probidad en el desempeño de su actividad como servidor público según se desprende de los hechos narrados en el cuerpo del presente Punto de Acuerdo Económico, dejando en consecuencia sin efecto, a partir de esta fecha, el nombramiento conferido por este Pleno en sesión de fecha 13 de noviembre de 2003.--- Tercero.- En consecuencia la suscrita Comisión de Fiscalización y Gasto Público en los términos de los artículos 27, fracción XXXV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y 79 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicita que el inmediato superior jerárquico se nombre encargado del despacho por Ministerio de Ley mismo que recae en el C.P. Andrés Garate Castro. Dicho nombramiento será efectivo hasta en tanto el Congreso del Estado nombre al Auditor Superior de Fiscalización como titular del Órgano Superior de Fiscalización.--- Cuarto.- Se ordena a la Secretaría de la Mesa Directiva que inmediatamente notifique al C. Jorge Alberto Coral Gutiérrez de su remoción como Contador Mayor de Hacienda, apercibiéndolo de las responsabilidades administrativas y penales en que puede incurrir al desacatar esta determinación.--- Quinto.- Se aprueba que el Presidente de la Mesa Directiva, en nombre y representación del Congreso del Estado, presente ante la Procuraduría General de Justicia del Estado

denuncia de hechos en contra del C.P. Jorge Alberto Coral Gutiérrez y quienes resulten responsables por la presunta comisión de los delitos de: Usurpación de Funciones, Falsificación y Uso Indebido de Sellos, Marcas, Llaves, Contraseñas y otros Objetos, Ejercicio Indebido del Servicio Público, Coalición de Servidores Públicos, Abuso de Autoridad, Infidelidad en la Custodia de Documentos, Robo, Despojo y lo que resulte de las conductas realizadas.--- Sexto.- Se ordena a la Mesa Directiva proceda a poner en posesión del Cargo de manera inmediata al C. C.P. Andrés Garate Castro. Así mismo se le instruya a garantizar la conservación de documentación contable en forma parte de los haberes del Poder Legislativo.--- Séptimo.- Se solicita para efecto de materializar la determinación del pleno, porque se tiene conocimiento de que en forma subrepticia se han sustraído documentos públicos propiedad del Poder Legislativo que contienen la información financiera del ejercicio del gasto que realiza el Poder Ejecutivo del Estado, y que incluso se han apoderado de las instalaciones de la Contaduría Mayor de Hacienda, que están a cargo del Poder Legislativo lo que por supuesto constituye un delito, en contubernio con personal de alto nivel del Poder Ejecutivo del Estado ante la inminente realización de auditorías programáticas a la Oficina del Gobernador del Estado, del Secretario General



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN



A FEDERACIÓN
A DE LA NACIÓN
DE ACUERDOS
CONTROVERSIA
CIONES DE

de Gobierno, del Secretario de Desarrollo Social y del Secretario de Planeación y Finanzas. Por lo que ante la flagrante vulneración de la soberanía del Poder Legislativo y en defensa de su patrimonio y de su autonomía resulta de extrema urgencia rescatar de la intromisión de otros poderes a este poder público y así restablecer el estado de derecho para posteriormente dar inicio al procedimiento de responsabilidades a que haya lugar, por lo que con ese propósito se solicita se suspenda la presente sesión, sea designado en este acto como Recinto Oficial de esta Soberanía las Instalaciones de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado ubicadas en Plaza Baja California, módulo G, Avenida Calafia y Calzada Independencia Centro Cívico y Comercial de Mexicali, a efecto de continuar de inmediato con el desahogo de nuestra sesión en dicho recinto oficial y proceder formal y materialmente a instalar al funcionario C.P. Andrés Garate Castro para que éste reciba todos los bienes y efectos propiedad de este Poder Público y desahogado ese punto retornar a este recinto a continuar con el desahogo de esta sesión ordinaria.--- Octavo.- Así mismo se le solicita al Presidente de este Congreso solicite la intervención de las fuerzas públicas para los efectos antes citados.--- Así como sus efectos y consecuencias; entre otros las auditorías, visitas, intervenciones y/o cualquier otro acto que emitido

por el Encargado, Suplente, Superior o Inferior Jerárquico o cualquiera que sea la denominación que se haya utilizado, que ilegal e inconstitucionalmente designó el Congreso del Estado en lugar del C.P. JORGE ALBERTO CORAL GUTIÉRREZ como Contador Mayor de Hacienda del Estado de Baja California.--- b) Las violaciones al procedimiento legislativo que dieron origen al Acuerdo Económico impugnado en los términos precisados en los Conceptos de Invalidez.--- c) Los artículos 23 y 24 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, con motivo de su primer acto de aplicación en perjuicio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, consistente en el inconstitucional Acuerdo tomado por el Poder Legislativo de esa misma Entidad Federativa el doce de junio de 2004, por el que se llamó a los suplentes de los diputados ausentes a dicha sesión, con la finalidad de convalidar el inconstitucional nombramiento del hoy denominado 'Encargado del Despacho por Ministerio de Ley de la Contaduría Mayor de Hacienda' y/o Auditor Superior de Fiscalización, ambos del Estado de Baja California.--- 2.- Del Encargado del Despacho por Ministerio de Ley de la Contaduría Mayor de Hacienda y/o C. Auditor Superior de Fiscalización, ambos del Estado Libre y Soberano de Baja California: las auditorías, visitas, intervenciones, y/o cualquier otro acto tendiente a



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

vulnerar el ámbito competencial del Poder Ejecutivo Estatal, representado por el suscrito Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California”.

SEGUNDO.- En la demanda se señalaron como antecedentes del caso, los siguientes:

"1.- Con fecha doce de junio del año dos mil cuatro, el Congreso del Estado de Baja California, celebró sesión del Tercer Período Ordinario de Sesiones correspondientes al tercer año de ejercicio Constitucional, de la XVII Legislatura, en el salón de sesiones ‘Lic. Benito Juárez García’, ubicado en el edificio del Congreso del Estado, siendo el orden del día el siguiente:--- 1.- Aprobación de las actas de sesión de instalación y ordinaria, celebrada el día 1° de junio de 2004.--- 2.- Correspondencia recibida.--- 3.- Correspondencia despachada.--- 4.- Informe de comisiones para actos especiales.--- 5.- Informes o dictámenes que rinden las comisiones especiales o permanentes.--- 6.- Asuntos generales.--- 2.- En el desahogo de los asuntos generales se presentó entre otros un ‘punto de acuerdo económico’, en el que entre otras cosas, se propuso la remoción del Contador Mayor de Hacienda C.P. Jorge Alberto Coral Gutiérrez, y como consecuencia, la designación de una persona a la cual denominaron ‘Encargado del Despacho

por Ministerio de Ley de la Contaduría Mayor de Hacienda', así mismo se propuso que se suspendiera la sesión pública ordinaria y se designara como recinto oficial, para continuar la sesión de manera inconstitucional el edificio que ocupa de manera oficial la Contaduría Mayor de Hacienda del Estado de Baja California.--- 3.- Al ser votado y aprobado el Acuerdo a que se refiere el punto que antecede, por 13 Diputados integrantes del Congreso, en consecuencia el Presidente de la Mesa Directiva ordenó el traslado de dicha sesión al inmueble de mérito.--- 4.- Una vez que se trasladó la sesión a las instalaciones ubicadas, en el Módulo G, de la Plaza Baja California, sito en Calle Calafia y Calzada Independencia, del Centro Cívico, los diputados presentes acordaron impedir el ejercicio del cargo de Diputado Local a diversos miembros de la XVII Legislatura, convocando inconstitucionalmente a sus suplentes, con la finalidad de que ocuparan el lugar de aquéllos en la Legislatura; así mismo tomaron protesta al C. Miguel Garate Castro, como Encargado del Despacho por Ministerio de Ley de la Contaduría Mayor de Hacienda y/o Auditor Superior de Fiscalización, destituyendo al anterior titular, así como a diversos funcionarios de dicho órgano.--- 5.- Una vez que tomaron los acuerdos señalados en el punto anterior, los trece diputados que 'sesionaron' en el Modulo G, de la Plaza Baja



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

California, sito en Calle Calafia y Calzada Independencia, del Centro Cívico, se trasladaron al Salón de Sesiones 'Lic. Benito Juárez García', en el Edificio del Congreso del Estado, siendo aproximadamente las 00:00 horas del día trece de junio del año dos mil cuatro, con el objeto de reanudar el desarrollo de la multicitada sesión; en ese sentido, las determinaciones acordadas por dichos diputados, al continuar con los trabajos en el recinto parlamentario, entre ellas, el iniciar juicio político en contra del Procurador General de Justicia del Estado y del Presidente Municipal de Ensenada, Baja California, respectivamente, así como la desaparición de la Credencial Estatal de Elector, y ordenar la auditoría de las cuentas públicas de la Secretaría Particular del Poder Ejecutivo y de la Secretaría General de Gobierno, las cuales se encuentran viciadas de origen, al devenir de la continuación de una sesión celebrada en un lugar que no se encontraba habilitado legalmente como recinto oficial del Congreso del Estado, dando así por concluida la sesión iniciada el doce de junio del año en curso, en las primeras horas del día trece del mismo mes y año.--- Cabe precisar, que no se pone en entredicho la soberanía de que debe gozar el Poder Legislativo del Estado de Baja California en su funcionamiento, sin embargo, las determinaciones que se tomen por éste deben estar sujetas y condicionadas al

cumplimiento de la legislación respectiva, lo que en el caso concreto no aconteció.--- 6.- En fecha 14 de junio de 2004, el suscrito Gobernador Constitucional del Estado de Baja California recibió el oficio Número 06661 de fecha 12 de junio de 2004, suscrito por el C.C. Diputado Presidente y Diputada Secretaria del Congreso del Estado de Baja California, mediante el cual señalaban que 'para los efectos constitucionales previstos en el artículo 49, fracción I de la Constitución Política Local y en su caso para la debida publicación y observancia, se remite en una (1) foja útil, Decreto N° 305, mediante el cual se declara recinto oficial el Módulo G, de la Plaza Baja California, sito en Calle Calafia y Calzada Independencia, del Centro Cívico, para efectos de continuar con el desahogo de la sesión ordinaria de la H. XVII Legislatura del día 12 de junio del año 2004', tal y como se acredita con la copia certificada del oficio que como medio probatorio se adjunta a la presente demanda.--- 7.- En razón de la fecha en que fue recibido el referido Decreto N° 305, se envió para su publicación en el siguiente número del Periódico Oficial del Estado, siendo la fecha de publicación el día dieciocho de junio del año en curso, para surtir sus efectos al día siguiente de ella, lo anterior según lo dispuesto por el Poder Legislativo en el Artículo Transitorio Único de dicho Decreto.--- 8.- No omito manifestar a Usted que mediante lo anterior se hizo la publicación del



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Decreto de mérito, a pesar de que los efectos y consecuencias del contenido del mismo solamente generarían actos futuros, resultando en el caso concreto que la sesión de mérito se había realizado con antelación no sólo a la publicación del Decreto, sino inclusive a la fecha de recepción del oficio enviado al suscrito.--- 9.- No fue sino hasta el día veinticuatro de junio del año dos mil cuatro, cuando la XVII Legislatura, volvió a sesionar en el recinto parlamentario ubicado en el Edificio del Congreso del Estado, en la cual, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, tomó protesta a dos suplentes de los Diputados propietarios, éstos últimos a quienes se les impidió el ejercicio legítimo de su cargo público popular, desde el día doce de junio del mismo mes y año, realizando el citado Poder Legislativo, actos y tomando acuerdos viciados de origen, y continuando con la emisión de éstos, porque a consecuencia de los hechos señalados con antelación, se vio afectada la debida integración y correcto funcionamiento del Poder Legislativo del Estado y, por ende, la constitucionalidad de los actos que de éste emanen”.

TERCERO.- La parte actora expresó los conceptos de invalidez que estimó pertinentes, los cuales no se transcriben en virtud del sentido del presente fallo.

CUARTO.- Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos son: 14, 16, 40, 116, 133 y demás relativos y aplicables de la misma Constitución.

QUINTO.- Por acuerdo de treinta de junio de dos mil cuatro, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 69/2004 y, por razón de turno, designó como instructora a la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos.

Por auto de la misma fecha, la Ministra instructora admitió la demanda; ordenó emplazar con el carácter de autoridades demandadas, al Poder Legislativo del Estado de Baja California, a la Contaduría Mayor de Hacienda y/o a la Auditoría Superior de Fiscalización de la entidad; asimismo, ordenó dar vista al Procurador General de la República.

SEXTO.- Resulta innecesario aludir los argumentos expuestos por las autoridades demandadas en su respectiva contestación de demanda, así como de la opinión del Procurador General de la República, en atención al sentido del presente fallo.

SÉPTIMO.- Agotado en sus términos el trámite respectivo, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley



Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

OCTAVO.- En atención a la solicitud formulada por la Ministra Ponente al Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Segunda Sala de este Alto Tribunal para su radicación y resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, en los términos del artículo 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto Cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, por virtud de que se plantea un conflicto entre el Poder Legislativo y Contaduría Mayor de Hacienda y/o Auditoría Superior de Fiscalización con el Poder Ejecutivo, todos del Estado de Baja California; además de que de acuerdo con el sentido del fallo se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO.- En el caso, se estima innecesario analizar la oportunidad de la demanda y la legitimación de las partes, por las razones siguientes:

En el escrito de demanda de controversia constitucional revela que la parte actora en el capítulo de autoridades demandadas señaló, entre otras, a la siguiente:

“2. Encargado del Despacho por Ministerio de Ley de la Contaduría Mayor de Hacienda y/o Auditor Superior de Fiscalización, ambos del Estado Libre y Soberano de Baja California,” o quien realice las funciones de supervisor y control del gasto en el Estado.

Como actos cuya invalidez se solicita a través de la controversia constitucional en que se actúa, la demandante atribuye a la citada autoridad la siguiente:

“2. Del Encargado del Despacho por Ministerio de Ley de la Contaduría Mayor de Hacienda y/o Auditor Superior de Fiscalización, ambos del Estado libre y soberano de Baja California: las auditorías, visitas, intervenciones y/o cualquier otro acto tendiente a vulnerar el ámbito competencial del Poder Ejecutivo Estatal, representado por el suscrito Gobernador del Estado libre y Soberano de Baja California.”.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Controversia Constitucional 69/2004

670
FORMA A-55
295

Ahora bien, Andrés Garate Castro, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado de Baja California, por oficio recibido en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el dieciocho de octubre de dos mil cuatro, en la cual ofreció diversas pruebas, manifestó lo siguiente:

En dicha contestación esta autoridad realiza diversas precisiones en cuanto a la Contaduría Mayor de Hacienda como parte demandada en esta controversia y respecto de la contestación de la demanda precisó lo siguiente:

SECRETARÍA DE JUSTICIA
AGENCIA GENERAL DE ACUERDOS
ÁRBITRO DE CONTROVERSIAS
NACIONALES Y DE ACCIONES DE
CONSTITUCIONALIDAD

“Es necesario precisar que la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado de Baja California, con base en el artículo 2º de la Ley de Fiscalización de las Cuentas Públicas para el Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial No. 30, de fecha 20 de septiembre de 1992, Sección I, Tomo XCIX, tiene a su cargo las facultades que le otorga la ley antes citada y es el órgano de fiscalización dependiente y auxiliar del Congreso del Estado para la revisión de la cuenta pública que están obligadas a rendir el Poder Ejecutivo y Judicial del Estado de Baja California, Ayuntamiento y Organismos o Instituciones que administren o manejen fondos o valores públicos.”

Por su parte, en el oficio de fecha dieciocho de agosto de dos mil cuatro, mediante el cual dan contestación a la demanda el

diputado Presidente Everardo Ramos García y la diputada Secretaria Laura Sánchez Medrano en nombre y representación del Congreso del Estado de Baja California, se indica, en lo conducente, lo siguiente:

“No es aplicable el artículo 37 de la Constitución local, en la forma que aduce el Ejecutivo, si tomamos en cuenta que mediante el Decreto número 269, publicado en el Periódico Oficial del 30 de enero del 2004, se reformó el artículo 37 de la Constitución Local, para crear el órgano Superior de Fiscalización del Estado de Baja California, y en el artículo 3º transitorio del referido decreto, se previó que hasta en tanto no se estableciera y empezara a ejercer sus atribuciones dicho órgano, LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DEL CONGRESO DEL ESTADO CONTINUARÍA EJERCIENDO LAS ATRIBUCIONES QUE ACTUALMENTE TIENE CONFORME A LA CONSTITUCIÓN LOCAL Y A LA LEY DE FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS DEL ESTADO, VIGENTES EN ESA FECHA. De lo anterior se desprende, que en la fecha (12 de junio de 2004) en que fue removido JORGE ALBERTO CORAL GUTIÉRREZ y nombrado para que se hiciera cargo por Ministerio de Ley de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado el C. P. ANDRÉS GÁRATE CASTRO, estaba plenamente vigente el cargo de Contador Mayor de Hacienda del



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Congreso del Estado, y desde luego, estaba y está hasta la fecha, plenamente en funciones la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado de Baja California; y, luego entonces, le resultan aplicables todas las disposiciones previstas en la constitución y en la Ley Reglamentaria correspondiente, respecto al funcionamiento de la referida Contaduría Mayor de Hacienda y respecto al nombramiento y remoción del Contador Mayor de Hacienda, titular de dicho órgano.”

Por todo lo anterior, en términos del artículo 35 de la Ley Reglamentaria de la materia, a efecto de mejor proveer en el presente asunto, se ordena requerir a Andrés Garate Castro, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado de Baja California, para que precise si efectivamente existen o no los actos cuya invalidez se demanda, y en caso de existir, remita a este Alto Tribunal copia certificada de los oficios o documentos a través de los cuales haya ordenado la realización de “auditorías, visitas, intervenciones y/o cualquier otro acto “tendiente a vulnerar el ámbito competencial del Poder Ejecutivo Estatal”.

Al caso es aplicable, la tesis cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes:

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*

Tomo: *XVI, agosto de 2002*

Tesis: *P./J. 37/2002*

Página: 906

"PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SI LO CONSIDERA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR, DE OFICIO, QUE SE RECABEN Y DESAHOGUEN AUNQUE YA LE HAYA SIDO PRESENTADO EL PROYECTO PARA SU RESOLUCIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). El precepto mencionado faculta al Ministro instructor para ordenar, de oficio, en todo tiempo, que se recaben y desahoguen las pruebas necesarias para la mejor resolución del asunto, entendiéndose por la expresión "en todo tiempo", cualquier etapa del procedimiento de las controversias constitucionales, es decir, desde la admisión de la demanda hasta el momento en que el Ministro instructor somete a consideración del Pleno de este Alto Tribunal el proyecto de resolución respectivo, de conformidad con lo dispuesto por



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

los artículos del 24 al 36 de la ley reglamentaria de la materia, relativos al capítulo "De la instrucción".

Por tanto, con fundamento en el artículo 35 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se debe considerar, por mayoría de razón, que si una vez presentado el proyecto al Pleno de este Alto Tribunal para su resolución, éste considerara necesario recabar y desahogar alguna prueba, podrá ordenarlo de oficio."



En consecuencia, procede devolver los presentes autos a la Subsecretaría General de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de que se recaben las pruebas aludidas.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO. Devuélvanse los presentes autos a la Subsecretaría General de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos precisados en el último considerando de esta resolución.

Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los

Controversia Constitucional 69/2004

Señores Ministros: Margarita Beatriz Luna Ramos, Genaro David Góngora Pimentel, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Presidente Juan Díaz Romero. Fue ponente la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos.

Firman el Presidente y la Ministra Ponente, con el Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe.

PRESIDENTE:

MINISTRO JUAN DÍAZ ROMERO.

PONENTE:

MINISTRA MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIO DE ACUERDOS:

LIC. MARIO ALBERTO ESPARZA ORTIZ.

El Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hace constar que, en cumplimiento al artículo 191 de la Ley de Amparo, al terminar las labores de este día se fijó, en el lugar destinado para las notificaciones, una lista de los asuntos tratados en la audiencia de esta Sala celebrada el día de hoy, en la que se incluye este expediente (o t o c a)

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 69/2004

México, D. F., A. DIECIOCHO DE MARZO DE DOS MIL CINCO

EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA SEGUNDA SALA

Esta hoja corresponde a la Controversia Constitucional 69/2004, promovida por el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California. Fallado el dieciocho de marzo de dos mil cinco, en el sentido siguiente: **ÚNICO.** Devuélvanse los presentes autos a la Subsecretaría General de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos precisados en el último considerando de esta resolución. *Conste.*

26 ABR 2005

En 26 ABR 2005 **y Por medio de lista se notificó la resolución anterior a las partes. Conste.**

SIENDO LAS CATORCE HORAS DE LA FECHA ANTES INDICADA Y EN VIRTUD DE NO HABER COMPARECIDO LOS INTERESADOS A OIR NOTIFICACIONES SE TIENE POR HECHA DICHA NOTIFICACION POR MEDIO DE LISTA. DOY FE.